

Autor: Marina Corrêa de Almeida

Investigadora en estancia posdoctoral en el Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Doctora en Estudios Latinoamericanos, UNAM. Maestra y Licenciada en Derecho por la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. Miembro Fundadora de la Asociación Nuestramericana de Estudios Interdisciplinarios en Crítica Jurídica, A.C. Sus líneas de investigación son: Crítica Jurídica, Pluralismo Jurídico, Sistema Internacional de los Derechos Humanos, Derechos de los Pueblos Indígenas, Derecho Constitucional Comparado. Contacto: marinacalmeida@hotmail.com

LA RESISTENCIA AUTÓNOMA INDÍGENA FRENTE A LOS MEGA- PROYECTOS EN MÉXICO: ESTRATEGIAS DE LUCHA DE LA COMUNIDAD DE AMILCINGO CONTRA EL PROYECTO INTEGRAL MORELOS. ENTREVISTA A SAMANTHA CESAR¹

En el año 2010, la Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentaron el Proyecto Integral Morelos (PIM) a la sociedad mexicana, con la pretensión de instalar una central termoeléctrica de ciclo combinado, un gasoducto y un acueducto en territorios de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, afirmando la necesidad de desarrollo de la zona y la expansión de los servicios de electricidad, sin considerar el impacto que este proyecto pudiera tener en la realidad social de la zona.

Este y otros megaproyectos son hoy los responsables de los conflictos socioambientales que se desencadenan en el territorio mexicano, muchos de ellos en territorios indígenas que tradicionalmente han sido regulados a partir del régimen de propiedad colectiva, donde sobrevive el trabajo comunitario y donde la toma de decisiones se ha realizado bajo formas asamblearias.

1.- Samantha Cesar es integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua - Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA), moradora de la comunidad de Amilcingo e integrante de la Asamblea de Resistencia de Amilcingo, Morelos; activista y defensora de derechos humanos, profesora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).



Por esta razón, en México hemos visto la resistencia de comunidades indígenas a lo largo del territorio nacional, a través de diversas formas de movilización, como manifestaciones, plantones, bloqueos de carreteras, entre otros. Además, diversas comunidades indígenas han reivindicado derechos como el de libre determinación y autonomía para mantener sus formas organizativas sociales, políticas, económicas y jurídicas en sus territorios ancestrales.

Es el caso de la comunidad indígena de Amilcingo, ubicada en el estado de Morelos, una de las comunidades severamente afectadas por la construcción del gasoducto del PIM. En esta entrevista, Samantha Cesar, integrante de la Asamblea de Resistencia de Amilcingo, nos lleva a recorrer los caminos de la resistencia a este megaproyecto y los senderos de la autodeterminación que se van construyendo como parte de esta lucha.

¿Cuándo surgió la propuesta del Proyecto Integral Morelos (PIM)?, ¿cómo era vivir en la comunidad de Amilcingo? ¿Cómo estaba organizada la comunidad? ¿Hubo un antes y un después del PIM para la comunidad?

En 2013 fue la primera vez que escuchamos los rumores de que se pretendía construir un gasoducto en Amilcingo y una obra de energía en la comunidad de Huexca.² Antes, el proceso comunitario en Amilcingo estaba marcado por la escasa participación de la comunidad, por la división de la comunidad provocada por un cacique integrante de la Central Campesina Cardenista,³ grupo que venía ocupando los puestos de poder y tenía controlada la comunidad desde hacía mucho tiempo. El año de 2014 estuvo marcado por la llegada de maquinaria y trabajadores para la construcción del gasoducto, y es en ese momento cuando estalla el conflicto en Amilcingo. Un poco antes, Samir⁴ trajo la información sobre el megaproyecto a la comunidad y, gracias a su persistencia, se convocó a la comunidad para organizarse ante la amenaza a su territorio, conformando innumerables asambleas desde finales de 2013 y principios de 2014. En otros territorios afectados, como Huexca y Jantetelco, ya se había desarrollado una organización fuerte ante este megaproyecto; Amilcingo llegó después a esta lucha. Después de varias asambleas, la comunidad decidió no permitir el paso del gasoducto por su territorio; al mismo tiempo, empezaron a llegar las empresas extranjeras, con equipo y trabajadores, al territorio de Amilcingo. En este momento el pueblo se enojó porque ya se había decidido no permitir el paso al gasoducto, razón por la cual se organizaron y lograron sacar las empresas de su territorio comunitario. En este sentido, es forzoso decir que Samir hizo un trabajo muy fuerte de organización comunitaria a través de la radio comunitaria – que en este momento era una radio bocina transmitiendo información

2.- “El PIM consta de dos centrales termoeléctricas ubicadas en la comunidad de Huexca, Morelos, las cuales han sido concesionadas a la empresa ABENGOA, de origen español; un gasoducto de aproximadamente 160 kilómetros de longitud que pretende transportar diariamente 9 mil millones de litros de gas natural, para dichas termoeléctricas, pasando por las faldas del volcán Popocatepetl y a través de más de 60 comunidades campesinas de los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, este gasoducto está concesionado a las empresas españolas ELECNOR y ANAGAS y a la empresa italiana BONATTI; una línea eléctrica de 20 Km de longitud a la subestación Yautepec; y un acueducto que pretende trasladar 50 millones de litros de agua diaria a las termoeléctricas, y que su trazo va del municipio de Ayala a Huexca, Morelos con una longitud de 12 Km”. Conf. disponible en <<https://www.grieta.org.mx/index.php/proyecto-integral-morelos-pim/>>

3.- Véase <<http://www.cardenista.org/>>

4.- Se trata del líder comunitario Samir Flores Soberanes (1982-2019), campesino indígena de la comunidad de Amilcingo, comunicador y activista. Integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA), de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos y del Congreso Nacional Indígena. Fundador de la radio comunitaria Amiltzinko y gran opositor del Proyecto Integral Morelos.



sobre el megaproyecto en la comunidad. Por supuesto, es un antes y un después en Amilcingo con todo este conflicto, aunque hay que tomar en cuenta que Amilcingo es un pueblo de tradición y lucha: hay vestigios históricos desde la conquista, pero en la historia contemporánea, en los años setenta, hubo una gran movilización para la construcción de una escuela normal rural para mujeres y dos escuelas de educación media superior en otras comunidades. Amilcingo, en ese entonces, se volvió la cabeza de la organización de esta lucha por la educación. Luego, la comunidad ha pasado por todo el proceso de violencia y represión de los años ochenta y noventa, lo que interrumpió toda la organización que se había generado en los setenta. Por esto, en 2014, cuando resurge el proceso organizativo, las nuevas generaciones también se unen; personas que en los setenta todavía eran niños o que no habían nacido ahora son los que están participando activamente en la lucha, en las esferas organizativas de la comunidad. Es posible decir que, algunos de los principales elementos para lograr la organización de la lucha contra este megaproyecto han sido, por un lado, el fortalecimiento de las asambleas como el espacio máximo de decisión, la grande participación de la comunidad y la creación de la radio comunitaria. En todos los casos, la intervención de Samir ha sido fundamental.

En este contexto de lucha contra el PIM, ¿cómo se organizan para la toma de decisiones? ¿Hubo cambios relevantes en la organización comunitaria desde que empezó la lucha contra el PIM, dentro de la misma comunidad y/o en relación con otras comunidades y organizaciones de pueblos indígenas?

Desde que empezó el conflicto con el desarrollo del megaproyecto se fueron creando varios niveles organizativos en la comunidad, que más tarde también fueron punto de partida al proceso para exigir el derecho a ejercer autonomía en la comunidad, haciendo valer la decisión del pueblo. Actualmente tenemos la asamblea comunitaria, que es el espacio más amplio de toma de decisiones, en la cual todos los miembros de la comunidad tienen voz y voto. Ha habido asambleas con la participación de más de mil personas. Se convoca a Asamblea cuando hay asuntos muy importantes por resolver dentro de la comunidad. Luego tenemos la Asamblea en Resistencia, la cual se realiza todos los días por la noche; es una asamblea más pequeña, en la que participan alrededor de 15 a 20 personas que representan a las familias. Esta asamblea ha sido la llama encendida de la resistencia en la comunidad. Tenemos, también, los Comités, como el Comité de Padres y Familias de la Escuela Secundaria, el Comité del Agua, las Autoridades por Usos y Costumbres (el Ayudante). La organización para la vida común en la comunidad se da a través de estos comités y asambleas; en los comités se trabaja horizontalmente para generar información y luego pasarlas a las asambleas. Todas las decisiones, incluyendo la de las Autoridades por Usos y Costumbres, pasan por el espacio asambleario, que es nuestro espacio horizontal de discusión, de opinión y de decisión. Es el espacio donde se hace análisis de la situación y, conjuntamente, se toman las decisiones sobre las problemáticas que vayan surgiendo. Es también lo que permite que nuestra organización sea fuerte y, a la vez, permanente. La asamblea comunitaria siempre es el órgano máximo de toma de decisiones en los pueblos indígenas; esto tiene que ver con su sistema normativo, pues Amilcingo es una comunidad indígena náhuatl que ha retomado los usos y costumbres tradicionales gracias, también, al proceso de lucha que se ha desarrollado en los últimos años.

Sobre la organización entre los pueblos contra los megaproyectos, el Frente de Pueblos para la Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) ha sido un espacio muy importante al estar conformada por varios pueblos de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Comunidades que, de alguna manera, son



afectadas por el PIM, ya sea por la construcción del gasoducto, del acueducto o de las termoelectricas que lo integran. Estos pueblos convergen con sus propios sistemas organizativos y de toma de decisiones autónomas, articulándose para la realización de acciones conjuntas contra el megaproyecto. En el proceso de definición de estrategias que realiza la comunidad, la decisión por la articulación con otras organizaciones ha sido fundamental, ya sean movimientos sociales, colectivos, organizaciones de derechos humanos, y también con otras redes, como la Red Nacional de Resistencia Civil, que tiene varios años luchando contra las altas tarifas de luz y los proyectos energéticos actuales. Además, pertenecemos al Congreso Nacional Indígena (CNI), espacio donde convergen diferentes pueblos indígenas y que, de alguna forma, retoma, o están de acuerdo, con los siete principios del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN);⁵ son pueblos indígenas que están luchando por su autonomía, son antipartidistas y, en ese sentido, planteamos que los pueblos tienen derecho a ejercer su autonomía, vivir su libre determinación.

Estas articulaciones son parte de la lucha, de una estrategia más amplia de lucha que la comunidad de Amilcingo ha venido desarrollando durante todos estos años.

En este contexto, ¿la discusión sobre autonomía indígena ha llegado a la comunidad? ¿En qué sentido se habla de autonomía en Amilcingo?

Más que autonomía como un concepto, en la comunidad se habla de la autonomía como derecho de decidir sobre el territorio, derecho de decidir sobre la vida en común, sobre cómo vivir juntos, cómo organizarnos sobre nuestro territorio, cómo relacionarnos con la madre naturaleza, o cómo tomar las decisiones en la comunidad. Estos elementos tienen que ver con lo que pensamos sobre la autonomía y han estado presentes en la vida comunitaria desde el inicio de la lucha, sobre todo por reacción a toda la violencia desde el Estado mexicano, las imposiciones y traiciones que ha habido desde las instituciones locales, municipales, estatales y federales, al imponer este proyecto. El PIM es el que terminó trayendo esta discusión sobre autonomía, cuando desconocieron a las autoridades agrarias y el ayudante municipal que ha vendido el territorio comunitario y que dieron paso al gasoducto. En ese momento, se propuso elegir nuevas autoridades que sí respetaran la decisión del pueblo de no dar paso al gasoducto. Desde la propuesta del megaproyecto la discusión sobre la autonomía se hizo más fuerte, pues creemos que no es posible que autoridades foráneas vengan a decidir cómo vamos a vivir en nuestro territorio, qué proyectos sí van y cuáles no, o que lleguen con sus políticas asistenciales que sólo logran hacer que la gente se disperse y no participe, a cambio de recibir dádivas o limosna. Por otro lado, el avance de la organización hacia la autonomía representó también la ruptura con un caciquismo presente en la comunidad, que no traía beneficios a la comunidad, sino cooptación a través de los programas sociales asistenciales. Fue cuando se afirmó la idea de que la autoridad no puede ser una persona, sino toda la comunidad en su órgano máximo de decisiones, que es la asamblea. Las autoridades que tenemos ahora son fruto de este proceso, pues después de un largo proceso jurídico, y después que las autoridades municipales desconocieron la decisión de la comunidad de no elegir autoridades por casillas y partidos, logramos que las autoridades pudieran ser elegidas según usos y costumbres, es decir, en asamblea a mano alzada, sin representación de partidos políticos. La búsqueda siempre ha sido por hacer autoridades comprometidas con las necesidades del pueblo y que se rijan bajo el mandato zapatista de “mandar obedeciendo”, esto es, obedezcan las decisiones emi-

5.- Son los siete principios zapatistas: mandar obedeciendo, servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, y bajar y no subir.



tidas por la asamblea. Esto ha provocado un cambio en las relaciones de poder en la comunidad, y también en la forma como lo ejercemos; cada vez hay más vinculación y participación entre los que son del pueblo y mayor responsabilidad también hacia la vida en común. La autonomía también la ejercemos en otros ámbitos; por ejemplo, con la brigada de salud, que plantea la necesidad de que la salud esté en manos de los pueblos, que adquiramos el conocimiento y las herramientas para ejercer nuestro derecho a la salud, recuperando los saberes tradicionales que ya existen en el pueblo, como es el caso del conocimiento sobre plantas medicinales, por ejemplo. Por otro lado, en la educación hicimos todo un trabajo de organización y lucha muy fuerte para defender la escuela primaria y un proyecto educativo en donde el pueblo, nuestros niños y niñas, también puedan vivir un proceso en que la escuela no hable solamente de un mundo totalmente ajeno al que viven en la comunidad, sino más bien que se vincule lo que se enseña con la vida comunitaria, una enseñanza que reivindique la historia de la comunidad, la identidad y el conocimiento que tenemos como pueblo indígena. Estos son los caminos o las diferentes vertientes que hemos tomado hacia la autonomía. Pero cada pueblo que se ha decidido por su libre determinación tiene su propio proceso y, a veces, van desarrollando más unos ámbitos que otros hacia la autonomía. Por ejemplo, los compañeros zapatistas, que tienen más desarrollada su estructura autonómica. Pero hay muchos otros pueblos y otras luchas en México que también hemos buscado aprender de ellas para caminar hacia la autonomía. Nosotros también entramos a la autonomía por la vía de la comunicación a través de la radio comunitaria, en donde ejercemos el derecho a la comunicación comunitaria, a pesar de que oficialmente no tenemos el permiso de radiodifusión del estado. Pero no lo necesitamos porque tenemos el permiso de las comunidades y del pueblo para ejercer este derecho.

Hacemos todo esto sin abandonar la defensa del territorio, pues la autonomía va muy ligada al territorio, es imposible ejercer autonomía si no se tiene el control sobre el territorio. Es por esto que en los últimos años ha habido muchos procesos de lucha por los territorios desde los pueblos indígenas en México, sobre todo ante el despojo que viene acompañando el desarrollo de los megaproyectos y las políticas extractivistas. La defensa del territorio, muchas veces, se ha convertido en el inicio del camino hacia la autonomía, como fue el caso de Amilcingo cuando empezamos la lucha contra el gasoducto, pero luego fuimos avanzando hacia otros niveles autonómicos.

Con relación al sistema de justicia mexicano y el desarrollo del megaproyecto, ¿la comunidad ha buscado acceder a la justicia? ¿A través de cuáles estrategias? ¿Cómo la comunidad evalúa el derecho a la justicia en este contexto de resistencia, sobre todo con relación al derecho a la consulta?

En los pueblos indígenas la ley tiene un peso importante, y esto tiene que ver con todo el proceso histórico de lucha del zapatismo y de los documentos que avalan la propiedad colectiva de la tierra para las comunidades, sea una propiedad comunal o ejidal, razón por la cual hay una fuerte tradición de apego a la ley que reconoce su derecho a la tierra y sobre su territorio. Entonces, aunque en México sea un problema muy grave la falta de acceso a la justicia, por toda la corrupción e imposición de las políticas neoliberales neoextractivistas y, también, por todo el deterioro y retroceso que ha habido en estas leyes con las reformas estructurales, a pesar de esto, sí es importante la estrategia legal como una de las líneas estratégicas de lucha.

En la lucha ni todo es social, ni todo es político, ni todo es jurídico, ni mediático, sino una combinación de todo, y esto es lo que nos ha permitido avanzar. En el caminar vamos evaluando qué estrategias son prioritarias en un momento y cuáles no de acuerdo con el contexto y cómo va dándose la correlación de fuerzas.



En este sentido, es que en Amilcingo siempre se ha visto lo legal como importante. Se entiende que hay un grave deterioro y dilatación de la justicia en México, que un proceso legal no nos garantiza una respuesta rápida y que pueden pasar años hasta una solución, además de que va a implicar, también, una resistencia, porque la dilatación de la justicia provoca que muchas comunidades terminen abandonando estos procesos.

Pero en Amilcingo ha sido importante. Gracias al proceso legal recuperamos el derecho que reconoce la capacidad de los pueblos de elegir y ejercer autoridad por usos y costumbres en asamblea general. A través de lo legal hemos ganado, también, una suspensión de la construcción del gasoducto, justamente por medio de un amparo agrario, que es ahora la jurisdicción que puede suspender proyectos energéticos porque, al igual que el proyecto energético, el ejido también es de interés social. Entonces, la justicia agraria se ha vuelto una de las herramientas de los pueblos para luchar contra estos megaproyectos.

Es complicada, es difícil y costosa, pero es una estrategia que se lleva a cabo gracias a la cooperación financiera de la misma comunidad, y también a la solidaridad y el trabajo comprometido de los abogados. En nuestro caso, especialmente, el jurista Juan Carlos⁶ ha hecho un trabajo muy importante con la correspondencia de la comunidad.

Ahora, si hablamos de la cuestión de los derechos humanos de los pueblos indígenas, también hay graves problemas en nuestro país respecto a ellos. El derecho a la consulta es uno de nuestros principales problemas. De los 82 pueblos afectados por el PIM, en ninguno se ha realizado la consulta indígena, no se les ha informado libre y previamente sobre el megaproyecto y, mucho menos, se buscó el consentimiento de las comunidades. Ha habido, desde entonces, una serie de violaciones a los derechos humanos, por lo que exigir el derecho a la consulta ha sido una de las estrategias más importantes de los movimientos indígenas.

Pero lo que está pasando ahora con este nuevo gobierno de Manuel Andrés López Obrador es que hay una cooptación de esta demanda y una perversión de esta. Se ha generado una nueva herramienta desde el gobierno que es la realización de consultas que no son ni consultas populares (art. 35, VIII de la CPEUM) ni tampoco consulta indígena, porque no se realiza conforme a los preceptos del Convenio 169 de la OIT o de los lineamientos que ha planteado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Con esta nueva figura que ha inventado el gobierno actual no se nos permite comprender cuál es la metodología para la medición de la consulta, ni saber quienes, realmente, cuentan estos votos. Por tanto, se trata de una herramienta para imponer, disfrazada de democracia. En el discurso se decía que se iba tomar en cuenta la opinión de la población, pero en los hechos hubo una serie de graves violaciones tanto a los derechos humanos como a la legalidad del proceso de consulta.

Este fue nuestro caso. El año pasado se impulsó este tipo de consulta, que fue hecha a pueblos directamente afectados pero también a otras ciudades, como la capital del Estado de Morelos, Cuernavaca. En los medios de comunicación salieron sólo los beneficios del megaproyecto y no los impactos sobre la vida, el agua y el territorio para las comunidades. Fue un proceso irregular, no había un control de cuántas veces cada ciudadano podía votar, no había una rigidez científica para medir los resultados, había preguntas muy amañadas para que la población votara por el “sí” al megaproyecto. Lo interesante en este proceso de consulta fue que en las poblaciones afectadas ganó el “no”, aunque sumando los votos de otras comunidades/ciudades no afectadas ganó el “sí”. E, infelizmente, este no ha sido sólo nuestro caso, esto está pasando con otros

6.- Juan Carlos Flores Solís es integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FDTA-MPT) y abogado. Trabaja con las comunidades náhuatl para proteger los derechos de las comunidades que son afectadas por los desarrollos a gran escala propuestos para el área, incluyendo el PIM.



megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Transístmico de Tehuantepec, que son los principales megaproyectos de este gobierno siguiendo con la estrategia extractivista y utilizando la demanda de los pueblos de derecho a la consulta para disfrazar de democracia procesos de imposición.

En este contexto de la consulta realizada por el nuevo gobierno, ¿cuáles eran las demandas de la comunidad que terminaron provocando la violación del derecho a la vida en la comunidad con el asesinato del líder comunitario Samir Flores?

Cuando el presidente se percató que el megaproyecto no avanzaba, realizó un mitin en el estado de Morelos y diversos líderes comunitarios asistieron para solicitar que se cancelara el megaproyecto, como era la demanda de los pueblos afectados, y nos contestó: “regreso en un mes y les traigo una respuesta”. Luego de un mes regresó con la decisión de realizar una consulta en las siguientes tres semanas sobre el proyecto y que la gente decidiera. Nosotros planteamos que, antes de realizar la consulta, era necesario realizar reuniones entre especialistas –vulcanólogos, biólogos, ingenieros y demás– y gente de la comunidad, para averiguar los impactos del megaproyecto e informar a los pueblos no sólo los aspectos positivos del proyecto, sino también sus consecuencias para la vida comunitaria en los pueblos. Pedimos reuniones amplias donde pudieran participar los pueblos afectados, científicos, el gobierno y, también, organizaciones de derechos humanos. No obstante, la respuesta desde el gobierno fue negativa, dijeron que iban realizar foros para informar, pero solamente informaban sobre los beneficios del proyecto energético para la región y no sobre los reales impactos socioambientales.

Diferentes compañeros de las comunidades asistieron a estos foros con la intención de reclamar su derecho a una verdadera consulta indígena y dar también la información que conocían sobre los impactos negativos del megaproyecto. Uno de ellos, Samir Flores, empezó a refutar la información que se difundía en estos foros. Justamente un día antes de su asesinato, él confrontó verbalmente al representante del gobierno federal en el estado de Morelos, Eric Flores,⁷ con datos e información que el delegado no tuvo forma de responder. Al día siguiente fue asesinado en la puerta de su casa. En este contexto de violencia, de imposición y de mentiras, se realizó la consulta unos días después que lo asesinaran, justo después que los pueblos hubiesen exigido al presidente la suspensión de la consulta por el contexto de violencia generado. Los pueblos exigían también el derecho a la expresión en los medios de comunicación para dar informaciones sobre el proyecto y su versión de los hechos ocurridos, pero no sólo les fue negado este derecho, sino que, además, desde el gobierno federal surgieron rumores de que el asesinato de Samir había sido orquestado para impedir la consulta, insinuando incluso la responsabilidad de los mismos compañeros de Samir en la lucha.

La serie de violencias no se ha terminado con el asesinato de Samir, sino que se ha venido incrementando con el desprestigio hacia las comunidades, pues el presidente nos ha llamado “radicales de izquierda”. Con este tipo de mensajes de odio que provienen desde el órgano máximo del gobierno federal generan un clima de mayor violencia hacia los pueblos que estamos en defensa del territorio.

7.- Hugo Eric Flores Cervantes es el actual delegado de los programas federales de bienestar en Morelos.

Hace más de un año del asesinato de Samir y sigue en la impunidad. Delante de esta injusticia, los pueblos han convocado las Jornadas en defensa del Territorio y la Madre Tierra “Samir somos todas y todos”,⁸ y de entre las diferentes acciones, ustedes han planteado un viaje a Europa. ¿Nos puede explicar por qué han desarrollado esta nueva estrategia?

Llevamos más de siete años luchando y hemos agotados todos los canales en el medio local, estatal y federal, además de los procesos legales que todavía no han funcionado, para intentar paralizar el proyecto. Todo esto en medio de las dificultades que enfrenta el país de dilatación de los procesos legales, la violencia, la agresión. En siete años de lucha ha habido gente detenida y violentada; en varios pueblos ha llegado la policía, ha habido desalojo de plantones, amenazas y hostigamiento. También, con este nuevo gobierno a nivel federal, hemos agotado todas las instancias para intentar detener el proyecto, pero hemos llegado a un tope. Hace un par de años se sentía la necesidad de ir a España y a Italia, pues es en estos dos países donde están los otros autores de este megaproyecto, que son las empresas. Finalmente, la lucha contra los megaproyectos se da en los pueblos, entre los pueblos y el gobierno, es decir, el Estado, y pocas veces se da contra las empresas. Entonces, esta es otra estrategia, generar otras líneas de lucha, directamente hacia las empresas. Las españolas Elecnor, Abengoa y Enagás, y la italiana Bonatti.

Se veía la importancia también de ir a España porque la construcción del gasoducto por estas empresas estaba financiada por el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), que está bajo el Ministerio de Industria Turismo y Comercio, a través de la Secretaría de Estado de Comercio. Este fondo es del Estado español, por lo que era importante dar a conocer a la población qué es lo que se está haciendo con los recursos públicos, además de denunciar la responsabilidad del Estado español sobre la serie de violaciones de derechos humanos que provoca en nuestro país. No es posible que el Estado español diga que es un defensor de derechos humanos para su sociedad, cuando invierte en megaproyectos que violan los derechos humanos en otros Estados y pueblos. Nos pareció importante dar visibilidad a la denuncia y poner en la agenda pública europea esta situación que estamos viviendo, buscar agencia política por parte de las empresas y del Estado español, informar a la población española lo que está sucediendo con sus impuestos y la responsabilidad de los impactos de estos proyectos financiados por el Estado español.

Además, se buscó generar articulación con otras organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales y otras luchas que hay allá también en contra de los megaproyectos en sus territorios, muchos son de las mismas empresas que desarrollan el PIM acá. Nos encontramos con mucha solidaridad por parte de las organizaciones, movimientos y de las otras luchas hacia nuestra lucha y lo que estamos viviendo en México, hacia la injusticia e ignominia por el asesinato de Samir. Pero, por supuesto, nos encontramos también con que el Estado español, y en específico este Fondo, no tienen ningún mecanismo o metodología para dar seguimiento sobre el aspecto de los derechos humanos en las inversiones en megaproyectos, a pesar de que en sus lineamientos se establece que deben respetar los derechos humanos.

8.- La jornada empezó el 20 de febrero de 2020, fecha del asesinato de Samir Flores, y fueron realizadas diversas acciones localizadas y globales.



Evidenciamos esto, tuvimos una reunión con los directivos de este Fondo y lo que nos respondieron fue que no tienen ninguna medida de seguimiento, bien como no tenían ninguna información sobre lo que estaba sucediendo en México con el megaproyecto. Cuando les ofrecimos dejar información de todo esto, nos dijeron que no podían recibirlo, porque si recibían los documentos de nosotras tendrían que recibir documentos de todos los demás afectados por los proyectos que financien. Esto habla de la falta de seguimiento que dan a estos fondos a pesar de que sus lineamientos establecen que tienen que hacerlo.⁹

Entonces, creemos que fue una oportunidad para nuestra lucha, pero también para otras luchas contra megaproyectos que son financiados por el Estado español y otros Estados de la Unión Europea, de denunciar la violación de los derechos humanos que se da en nuestros pueblos. No es posible solamente considerar los Estados nacionales como responsables por los megaproyectos cuando hay una complicidad, presión internacional y obediencia por parte de los países del Sur hacia estas inversiones internacionales, por esto consideramos que hay responsabilidad también de los Estados del Norte en muchos casos. Es importante poner en la escena pública los nombres de los responsables de estos proyectos que hay en nuestros países.

¿Cómo evalúan este viaje? ¿Cuáles fueron los principales obstáculos y avances de la lucha contra el PIM en el marco de los encuentros que tuvieron allá en Europa? ¿Qué lecciones traen de este viaje para la lucha de los pueblos de América Latina contra los megaproyectos?

Creo que ha sido un viaje muy fructífero por las nuevas alianzas que se están desarrollando con otras organizaciones que, esperamos, que puedan avanzar, ya que fueron un poco detenidas por lo que está pasando en todo el mundo con esta pandemia, que también ha frenado nuestro viaje.

Un proceso que nos tardó ocho años, un proceso que no ha sido fácil pero que, gracias a la colaboración entre diversas organizaciones, nos ha permitido llegar a Europa. Es claro que el colonialismo permanece; fuimos a las instalaciones de la empresa Elecnor y ellos no tienen ni idea de cómo recibirnos, estaban tan nerviosos que hasta llegó la policía; es decir, en su lógica no contemplan la posibilidad de que los pueblos afectados lleguen a sus oficinas y entreguen documentos. Por ejemplo, llevamos un documento escrito, queríamos que nos firmaran de recibido, como en cualquier oficina, y nos dijeron que este es un método arcaico, que sólo recibían documentos por correo electrónico; y más cosas así de absurdas. A nosotros no nos asustan estas formas de tratarnos, pues ha habido un desprecio desde siempre hacia los pueblos indígenas, incluso en nuestro país, de los gobiernos, empresas locales, de la gente mismo, el racismo es permanente. Tenemos claro que esto es parte de su poder y su lógica de dominación. Por nuestra parte, nosotras tenemos claros los objetivos y las causas de nuestra lucha; llegamos allá con esta claridad y por esto no nos afectó; por el contrario, la fuerza que sentimos en la posibilidad de estar allá tiene que ver también con la fuerza que tienen nuestros pueblos, el conocimiento que tenemos y que ha permanecido por tantos siglos, y estamos dispuestos a hablar de la lucha desde la visión integral de la vida y no desde una visión conservadora, sino de la vida de la humanidad que está vinculada con la lucha por los territorios y los recursos y que están amenazados. Entender que no es nada más apoyar una lucha, sino comprender la necesidad de que luchemos todos para

9.- Véase <<https://www.ico.es/documents/19/14629/POL-23+Pol%C3%ADtica+Medioambiental.pdf/ad4ba6b8-a8da-45a4-a35a-6d586fcd8261>>



defender la vida, más en estos momentos tan difíciles para la toda la humanidad. Defendamos nuestro derecho de tener un futuro como humanidad, un futuro que sea digno. A nosotras nos llenó mucho de fuerza el apoyo de las organizaciones, pero también en los foros en donde participamos, la gente con la que hablábamos. De alguna forma, creo que pusimos nuestro granito de arena para llamar a esta lucha por defender la vida, que tiene que ser en todas partes, en todos los territorios, cada uno desde su trinchera, pero defendiendo lo que es de todos, lo común, lo que es la vida misma para todos. Creo que es importante generar estos lazos; nos encontramos también con pueblos que están defendiendo sus territorios contra otros megaproyectos.

También en Europa hay proyectos que están dañando sus poblaciones rurales y también hay megaproyectos que provocan la gentrificación y el desalojo en las ciudades. Allá, la gente tampoco tiene recursos para pagar las altas tarifas de luz; es decir, allá también hay pobreza e injusticias; por esto fue importante conocer este otro lado de Europa. Además de la parte de la población que está luchando, también nos encontramos con la otra parte de la población que es solidaria, que tiene claro que estas formas tienen que cambiar. Es difícil generar lazos, pero creo que se ha logrado y esto también gracias a organizaciones acá en México que nos fueron apoyando en tejer este telar para poder llegar hasta allá y poder hacer todo lo que hicimos. La solidaridad internacional es algo muy importante, no podemos entender nuestra lucha sólo desde el contexto local, debemos entender que lo que está pasando es una afrenta a todos los pueblos del mundo, que el neoextractivismo está provocando una guerra en varios pueblos del mundo. Por esto es importante que los pueblos nos abracemos, intercambiemos y luchemos para defendernos.

Para finalizar, ustedes han regresado de Europa justo en medio una pandemia. ¿Cómo evalúan la lucha y la resistencia al PIM ahora en este nuevo contexto mundial? ¿Los desafíos de acceso a la justicia han cambiado desde entonces? ¿Los desafíos para la autonomía comunitaria han cambiado con el aislamiento social?

Los pueblos todavía no han hecho una evaluación de lo que está ocurriendo realmente porque el problema de salud aún no ha llegado a las comunidades. En este momento la pandemia se concentra en las ciudades, creo que poco a poco se irá analizando más a nivel comunitario. Lo que sí hemos evaluado es la necesidad de pensar la cuestión económica, porque este problema sí ya ha llegado a las comunidades. La gente o ya no tiene empleo o ya no puede vender sus productos, y esto está empezando a generar una preocupación sobre qué va pasar con la economía familiar.

No obstante, han surgido algunas estrategias para empezar a minorar los impactos de la pandemia en la economía familiar de los pueblos. También se han generado algunos talleres que se transmiten por la radio para fortalecer el sistema inmunológico, desde el conocimiento sobre medicina natural que tenemos. En lo que dice respecto a la lucha y la resistencia, estamos en un momento muy complicado, porque muchas de las estrategias tienen que ver con la denuncia y la visibilización en el espacio social y, en estos momentos, ocupar el espacio público está vetado justificadamente por la pandemia. Entonces, para nuestras luchas se va a ver un poco más adelante cómo la pandemia va afectar; por ejemplo, ahora hemos visto que, a pesar de todo lo que está pasando, el Tren Maya sí va avanzar. Creo que están aprovechando este momento de pandemia también para avanzar, acosar a los pueblos, seguir con los megaproyectos y violar derechos humanos de las comunidades de una manera impositiva. Pero en el



camino vamos a tener que ir generando nuevas estrategias; esto también es muy nuevo para nuestra lucha en los pueblos, es un nuevo momento para la lucha, muy diferente, que se irá construyendo en el camino mientras avanzamos.

La única certeza que tenemos en las comunidades es que nos tenemos a nosotros mismos como comunidad y que, en muchas ocasiones, hemos demostrado que logramos salir adelante estando juntos y organizados, estando unidos.

